



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

2025



I.	Introducción	3
	1. Estadísticas relevantes	4
	2. Objetivos de la guía	4
II.	¿Qué es la trata de personas?	6
	1. Medios comisivos	6
	2. Conductas punibles: verbos rectores	11
	3. La finalidad de explotación en el delito de trata de personas	13
	4. Sujeto activo: ¿Quiénes pueden ser tratantes?	17
	5. Sujeto pasivo: ¿Quiénes pueden ser víctimas de trata de personas?	17
III.	Trata de personas vs tráfico de migrantes	19
IV.	Buenas prácticas en la investigación del delito de trata de personas	20
	1. Inicio de la investigación	20
	2. Cómo proceder si la víctima no desea denunciar	20
	3. Fiscal Especializado en investigaciones complejas y contacto permanente.	20
	4. Notificación a la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas y Lavado asociado.	21
	5. Contacto permanente con las policías.	21
	6. Atención y protección a víctimas.	
	• 6.1 Garantía de protección sobre situación migratoria	22
	• 6.2 Atención a víctimas.	22
	• 6.3 Toma de declaración ante la policía de personas mayores de 18 años	27
	• 6.4 Situación especial de las niñas, niños y adolescentes	30
	7. Entrada, registro y rescate de víctimas	32
	8. Desarrollo de la investigación y técnicas especiales de investigación	32
	• 8.1 Algunas buenas prácticas en materia de investigación	32
	• 8.2 Técnicas especiales de investigación	34
	• 8.3 Consideraciones especiales para casos de asociaciones delictivas o criminales.	34
	• 8.4 Consideraciones especiales para casos de lavado de activos	35
	• 8.5 Delitos conexos de corrupción	36
V.	Herramientas internacionales	38
	1. Mecanismos de cooperación jurídica internacional para obtener prueba en el extranjero, recuperación de activos y protección de víctimas:	
	• 1.1 Asistencia mutua en materia penal	38
	• 1.2 Traslado de fiscales y policías al extranjero	39
	• 1.3 Equipos conjuntos de investigación (ECI)	39
	• 1.4 Comunicación de informaciones espontáneas y denuncias internacionales.	40
	• 1.5 Cooperación interinstitucional internacional	40
	• 1.6 AIAMP	40
	• 1.7 REDTRAM	41
	• 1.8 INTERPOL	41
	• 1.9 Sistema De Comunicación Policial Protegida I-24/7.	41
	• 1.10 Memorándum de Entendimiento	42
VI.	Mitos	43
VII.	Desafíos	44
	Anexo: números telefónicos de utilidad	45

I. INTRODUCCIÓN

En noviembre del año 2004, Chile ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, también conocida como Convención de Palermo. El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes, que complementa la citada Convención (en adelante e indistintamente el “Protocolo de Palermo”), obliga a los países a adoptar medidas para prevenir el delito de trata de personas, sancionar a los tratantes y proteger a las víctimas.

El enfoque que la Convención y el Protocolo referidos adoptan frente a la problemática de la Trata de Personas no solo dice relación con la persecución y sanción de los autores del delito, sino que también, y sobre todo, con la promoción y protección a las víctimas del delito, velando por la existencia de instancias de información, repatriación, asistencia judicial y cuidado de ellas, particularmente cuando se trata de niños y niñas.

En ese contexto, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile, el 8 de abril de 2011 fue publicada la Ley N° 20.507, que modificó el Código Penal (en adelante, “CP”) introduciendo los delitos

de tráfico ilícito de migrantes (artículo 411 bis del CP) y trata de personas (artículo 411 quáter del CP), y estableció normas para su prevención y más efectiva persecución penal. Además, la referida Ley incorporó el delito de asociación ilícita para cometer el delito de trata de personas, en consideración al aumento del fenómeno a nivel mundial, que atraviesa las fronteras, y de la existencia de grupos delictivos organizados dedicados a lucrar con la comisión de este tipo de delitos.

En ese mismo sentido, en virtud de la arista económica que tiene la comisión del delito de trata de personas, no se puede soslayar la vinculación entre éste y el delito de lavado de activos, previsto y sancionado en la Ley N°19.913, el cual debe ser igualmente investigado, justamente, con ocasión de la persecución del delito de trata de personas.

La Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante Decreto Exento N° 2.821 de 2008, creó la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas (en adelante, “MITP”), integrada por diversas entidades públicas, organismos internacionales y miembros de la sociedad civil, con el objeto de coordinar las acciones, planes y programas de los distintos actores institucionales en materia de prevención, represión y sanción de la trata de personas, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes.

¹Gajardo Orellana, T., & Torres Figueroa, A. (2011). Los tipos penales de tráfico de migrantes y trata de personas en la Ley 20.507. Revista Jurídica del Ministerio Público, 47, 240.

²Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Artículo 6.

1. Estadísticas relevantes

Según el informe estadístico elaborado por la MITP, desde la entrada en vigencia de la Ley N°20.507 hasta el 31 de diciembre de 2023, se han dictado **29 sentencias condenatorias** por el delito de trata de personas, entre las que encontramos 17 por el delito de trata sexual y 12 por el delito de trata laboral. Se registraron **42 personas condenadas**, siendo 20 hombres y 22 mujeres. A su vez, se han **formalizado 73 causas**, comprendiendo un total de 405 víctimas, de las cuales **35 son niños, niñas y adolescentes**. A su vez, del total de víctimas, 230 lo fueron por el delito de trata laboral (56,8%) y 173 por el delito de trata sexual (42,7%).

Durante este período, del total de 73 causas formalizadas, 41 de ellas fueron por el delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual (69,9%) y 22 con finalidad de trabajo forzado o servidumbre (30,1%).

En cuanto a la **distribución geográfica**, las regiones que presentan un mayor número de casos formalizados corresponden a la región Metropolitana, Arica y Parinacota y Tarapacá, O'higgins y el Maule.

2. Objetivos de la guía

De las obligaciones asumidas por Chile en el Protocolo de Palermo, destaca aquella que dice relación con la capacitación de las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en materia de persecución penal, así como en la protección de los derechos de las víctimas³.

Es por ello, que el Plan de Acción contempla medidas destinadas a fortalecer la respuesta de los organismos de control, sistematizando información relativa a buenas prácticas investigativas y a lecciones aprendidas en el contexto de la persecución penal de este delito.

Para el cumplimiento de aquello, la Subcomisión de Control y Persecución de la MITP elaboró, en el mes de noviembre del año 2014, una guía de buenas prácticas en la investigación criminal del delito de trata de personas, que ha sido actualizada por dicha subcomisión al año 2024.

El presente documento reúne las experiencias compartidas por diversos actores involucrados en la persecución penal del delito de trata de personas, y -con ello- sistematiza las buenas prácticas a tener en cuenta para una correcta y eficaz investigación.

Esta versión actualizada de la guía ha recogido la experiencia de instituciones tales como el Ministerio Público, la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana de la Policía de Investigaciones (en adelante, "BRITRAP"), el Departamento O.S.9. de Carabineros de Chile (en adelante, "O.S.9."), la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile (en adelante, "DIRECTEMAR"), el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ("MISP"), el Instituto Nacional de Derechos Humanos ("INDH"), el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ("SERNAMEG"), la Dirección del Trabajo y la Defensoría de la

³ Ibid.

Niñez –en su calidad de organismo técnico observador de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes–, quienes han abordado los nudos críticos que deben ser resueltos para una persecución penal eficaz y una investigación robusta en materia de trata de personas.

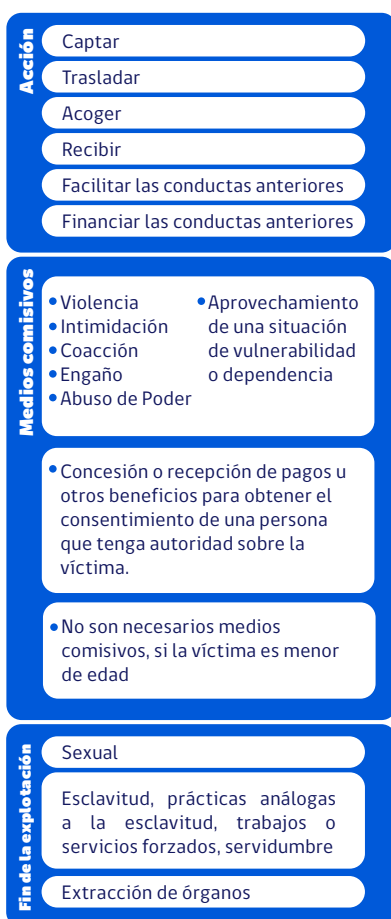
Por último, el documento recoge recomendaciones efectuadas en este ámbito por organismos internacionales, tales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Organización Internacional para las Migraciones.

La MITP recomienda a las policías, y a las y los fiscales del Ministerio Público utilizar esta guía como herramienta de capacitación de sus funcionarias y funcionarios, para fortalecer la investigación, la persecución penal y la atención y protección de las víctimas de este tipo de delitos.



II. QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS

El delito de trata de personas se encuentra tipificado en el artículo 411 quáter del CP. Las conductas descritas son las siguientes:



La característica esencial, y diferenciadora del delito de trata de personas respecto de otros delitos, es la cosificación de la persona respecto de la cual se ejerce el delito⁴. En otras palabras, las víctimas del delito de trata son utilizadas por las y los tratantes como medios para obtener beneficios, generalmente pecuniarios, degradando con ello su dignidad⁵.

1. Medios comisivos

El delito de trata de personas supone la **ausencia de consentimiento** o el otorgamiento de un **consentimiento viciado** por parte de la víctima⁶, quien es sometida a una situación de explotación, ya sea por medio del ejercicio de violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o dependencia, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra⁷.

El delito en cuestión se expresa en múltiples hipótesis, bastando una de ellas para que, de concurrir los demás elementos típicos, pueda considerarse configurado el delito⁸.

En el caso que la víctima sea **niño, niña o adolescente**, no se exige la concurrencia de alguno de los medios comisivos para la configuración del delito, bastando la existencia de alguno de los verbos rectores y la finalidad de explotación.

⁴ Matus, J. P., & Ramírez, M. C. (2021). Manual de Derecho Penal Chileno. Parte Especial (4ª ed.). Tirant Lo Blanch. p. 238.

⁵ 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). Sentencia dictada el 13 de diciembre de 2021, causa RIT 98-2021. Véase, en esa misma línea, la siguiente jurisprudencia: Juzgado de Garantía de Molina. (2013). Sentencia dictada el 27 de noviembre de 2013, causa RIT 760-2013; 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2023). Sentencia dictada el 2 de noviembre de 2023, causa RIT 319-2023.

⁶ Matus, J. P., & Ramírez, M. C. (2021, p. 250).

⁷ 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). Sentencia dictada el 1 de abril de 2021, causa RIT 264-2020. Considerando.

⁸ Cárdenas Aravena, C. (2013). Sobre ciertos problemas que se han suscitado en relación al delito de trata de personas. Informes en Derecho, 12, 146. Centro de Documentación Defensoría Penal Pública. p. 146. quinto.

En términos generales, los medios comisivos admiten ser descritos del siguiente modo⁹:

- **Violencia:** supuestos de aplicación de fuerza física directa ejercida sobre la víctima con el objetivo de doblegar su voluntad¹⁰.
- **Intimidación:** por intimidación debe entenderse infundir miedo en otro, usualmente amenazando con causar un mal, ya sea, a la misma persona objeto de la trata o a otra persona vinculada estrechamente con ella¹¹. A su vez, las amenazas deben ser serias, verosímiles e inmediatas, en el sentido de tener aptitud para doblegar la voluntad de la persona objeto de la trata¹².
- **Coacción:** en general, toda forma de amenaza o violencia, que tenga como resultado que la acción ejecutada por la víctima no sea producto de su voluntad plena y libre, y que no tengan la gravedad e inmediatez de una intimidación¹³.

El Protocolo de Palermo empleó el término “coacción” en el mismo sentido, a saber: como un término amplio que comprende violencia o intimidación¹⁴.

- **Engaño:** según la Real Academia Española (“RAE”) por engañar se debe entender “dar a la mentira apariencia de verdad” o “inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas”. Mientras que “engaño” ha sido definido por el mencionado diccionario como “falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa

o discurre”. En otras palabras, actuar de tal manera de inducir a error al destinatario del engaño o mantenerla en error, o cualquier conducta que influya en la representación intelectual del otro y que lo conduzca a una falsa idea de la realidad.

A su vez, el engaño puede ejecutarse mediante mentiras o declaraciones mendaces o incluso mediante actos concluyentes¹⁵. El engaño puede ser utilizado por la persona tratante en el momento de la captación o para mantener a la víctima bajo su control durante el traslado o en el lugar de explotación¹⁶.

Por último, el Manual sobre la Investigación del Delito de Trata de Personas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito define en los siguientes términos este medio comisivo: *crear hechos total o parcialmente falsos para hacer creer a una persona algo que no es cierto. En la trata de personas se refiere a la etapa de reclutamiento, donde el tratante establece un mecanismo de acercamiento directo o indirecto con la víctima para lograr el “enganche” o aceptación de la propuesta. Esencialmente se traduce en ofertas de trabajo, noviazgo, matrimonio*

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Matus, J. P., & Ramírez, M. C. (2021, p. 252).

¹⁶ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2009). Manual sobre la Investigación del Delito de Trata de Personas. Costa Rica. p. 12.

y en general una mejor condición de vida. De igual forma, el engaño es utilizado por la persona tratante para mantener a la víctima bajo su control durante la fase de traslado y posteriormente en los lugares de explotación¹⁷.

Una mujer migrante, en necesidad de trabajar para enviar dinero a su familia, fue engañada por un aviso que ofrecía empleo como garzona con promesas de ingresos atractivos. Al trasladarse a Chile bajo estas falsas expectativas, fue llevada a un bar donde fue obligada a consumir alcohol y a realizar servicios sexuales. Su libertad fue restringida mediante la retención de su documento migratorio y su teléfono, siendo sometida a explotación sexual bajo coerción y violencia¹⁸.

Abuso de poder: implica el ejercicio desviado de facultades legales o capacidades fácticas que tiene el autor del delito para ordenar a la víctima a realizar ciertas conductas¹⁹. Las facultades o capacidades pueden derivar de relaciones de familia, de custodia, educativas, laborales, entre otros. Es decir, es extensible a posiciones de poder distintas de cargos públicos, siendo lo determinante el actuar

abusivo de la persona que tiene autoridad.

Para encontrarse bajo este supuesto debe, necesariamente, concurrir un abuso de poder, es decir, un mal uso del poder, distinto del fin en cuya virtud fue investido²⁰.

Por último, según cierto sector de la doctrina, esta situación se puede confundir con el aprovechamiento de la dependencia de la víctima como, por ejemplo, en los casos en que el agresor está encargado de la custodia, educación, o cuidado o tiene con la víctima una relación laboral²¹.

Aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o dependencia: este medio comisivo se asocia a supuestos en los que, quien solicita a otra persona realizar alguna conducta o le induce a realizarla, sabe que -en ese contexto dado- la persona no puede sino aceptar lo que se le propone, y utiliza aquella circunstancia a su favor²². Debe tenerse presente, que para entender que concurre este medio comisivo no es necesario que la

¹⁷ Ibid.

¹⁸ 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). Sentencia dictada el 1 de abril de 2021, causa RIT 264-2020. En ese caso, el tribunal razonó que también se configuraron los medios comisivos de aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad y de violencia e intimidación (considerando décimo). Además, cabe referir que, a pesar de la acreditación de actos de violencia, el tribunal razonó que, las características del tipo no importan necesariamente violencia física para la concreción de las conductas de índole sexual, resultando éstas plenamente compatibles con un sometimiento moral (considerando octavo). Otro caso práctico de engaño, similar al anterior, ya había sido identificado anteriormente por el mismo tribunal, con ocasión de la dictación de la sentencia de fecha 3 de noviembre de 2012, en la causa RIT 293-2013, en la que una mujer migrante había sido traída a Chile bajo la promesa de que obtendría un trabajo de garzona, por una remuneración de \$1.400.000, además de una casa y comida. Una vez en el territorio nacional, fue llevada a un bar en la que fue obligada a ejercer la prostitución. Los tratantes le indicaron que esta sería la única manera de pagar la deuda que habría contraído con ellos al ser trasladada a Chile.

²⁰ Cárdenas Aravena, C. (2013). Informes en Derecho, 12, 150.

²¹ Matus, J. P., & Ramírez, M. C. (2021, p. 251).

²² Cárdenas Aravena, C. (2013). Informes en Derecho, 12, 151.

situación de vulnerabilidad sea imputable al autor de los hechos²³.

De tal manera, el autor solamente debe saber que la víctima no tiene otra opción que prestar los servicios por él requeridos²⁴, por su situación de vulnerabilidad, que puede provenir ya sea de desplazamientos forzados, falta de educación, desamparo por encontrarse en un lugar extraño, encontrarse en una situación migratoria irregular, conflictos armados, desastres naturales, entre otros.

Como bien ha explicado un sector de nuestra doctrina, este último medio comisivo se construye a partir de una asociación del “sujeto pasivo del delito de trata con una persona particularmente vulnerable, ya sea por carencias económicas, educacionales, emocionales, por su corta o avanzada edad o por su pertenencia a alguna minoría”.

Asimismo, la dependencia puede ser de índole económica y la vulnerabilidad desencadenarse por el mismo factor, generando una situación de desamparo de una víctima que ingresa a un país desconocido, muchas veces sin conocer el idioma, y sin poder subsistir con sus propios medios²⁵. En ese mismo sentido lo han fallado nuestros tribunales de justicia, para quienes “La vulnerabilidad es el factor principal que posibilita que estas personas se conviertan en víctima a un bajo costo para sus tratantes, donde un elemento clave es la violencia, que genera una relación asimétrica de poder y dependencia entre los tratantes y las víctimas, posibilitando así la explotación”.

En efecto, las consideraciones anteriores fueron ponderadas por el 4º Tribunal de

Juicio Oral en Lo Penal de Santiago, en la causa RIT N° 98-2021, en que el tribunal razonó que se configuraba el medio comisivo de aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de víctimas de nacionalidad paraguaya que habían sido captadas para ejercer la prostitución en Chile, pues la imputada conocía que las víctimas provenían de familias disfuncionales y de escasos recursos, que no tenían redes de apoyo y que necesitaban ejercer la prostitución para cubrir necesidades esenciales o para cubrir los gastos de mantenimiento de sus familiares, sumado a su situación de desarraigo por su calidad de migrante; todo lo cual fue aprovechado por la imputada para obtener réditos económicos²⁶.

A partir de la práctica judicial, se ha podido determinar que un antecedente importante a considerar que permite acreditar que la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad, son los informes de daño que a su respecto son realizados. En efecto, los tribunales de justicia han considerado que el daño emocional resulta ser un elemento de contexto que, si bien no es parte del tipo penal, confirma la situación de vulnerabilidad²⁷.

²³ Ibid.

²⁴ Naciones Unidas. (2000). Informe del Comité Especial encargado de elaborar una convención contra la Delincuencia Transnacional sobre la labor de su periodo de sesiones primero a 11º, A/55/383/Add.1, párrs. 63-68.

²⁵ Naciones Unidas. (2000). Informe del Comité Especial encargado de elaborar una convención contra la Delincuencia Transnacional sobre la labor de su periodo de sesiones primero a 11º, A/55/383/Add.1, párrs. 63-68.

²⁶ Gajardo Orellana, T., & Torres Figueroa, A. (2011, p.240)

²⁷ 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). Sentencia dictada el 13 de diciembre de 2021, causa RIT 98-2021. Considerando décimo noveno. Véase, en la misma línea: Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt. (2024). Sentencia dictada el 21 de junio de 2024, causa RIT 18-2024.

²⁸ 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). Sentencia dictada el 1 de abril de 2021, causa RIT 264-2020. Considerando octavo.

Concesión o recepción de pagos u otros beneficios para la obtención del consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra: para entender configurado este medio comisivo, se debe pensar en hipótesis de hecho en que una persona tenga la facultad de consentir por otra, fuera de los casos de los padres respecto de hijos o hijas, pues -respecto de las víctimas menores de edad- no es necesario probar medio comisivo alguno. Ese es el sentido que se le debe dar semánticamente a la frase “una persona que tenga autoridad sobre otra”, ya que, de lo contrario, sería irrelevante obtener su consentimiento para obtener la prestación que el sujeto activo desea²⁸.

Algunas formas empleadas por las personas tratantes para el control de las víctimas

El delito de trata de personas se caracteriza por el conocimiento que tiene el autor de la situación de vulnerabilidad de la víctima, ya sea de su falta de educación, pobreza o escasas oportunidades laborales, situación migratoria, u otra circunstancia idónea para el aprovechamiento de (la o él) tratante.

Dentro de las acciones que pueden ser identificadas como formas de control de las víctimas, destacan las siguientes:

¿Cómo se controla a las víctimas?

- Retención de los documentos. Violencia y limitación de desplazamiento.
- Amenaza a víctimas y seres queridos.
- Generación de una deuda.
- Manipulación y sometimiento emocional.
- Se les responsabiliza de la situación en que se encuentran, entre otras.

Cabe destacar, que para entender realizada alguna de las acciones típicas no se requiere el ejercicio de violencia física para lograr la finalidad de explotación, pues ésta resulta del todo compatible con el sometimiento moral²⁹.

Por último, resulta importante precisar que, el Protocolo de Palermo señala en su artículo 3º letra b), que el consentimiento prestado por la víctima para realizar alguna de las conductas que constituye la explotación, no tendrá validez cuando los tratantes hayan recurrido a cualquiera de los medios comisivos enunciados en dicho artículo (amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al

²⁸ Cárdenas Aravena, C. (2013). *Informes en Derecho*, 12, 152.

²⁹ 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). *Sentencia dictada el 1 de abril de 2021, causa RIT 264-2020. Considerando octavo.*

rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios).

Así, pese a que la Ley N° 20.507 no indica expresamente que el consentimiento de la víctima no será tomado en cuenta cuando se haya incurrido en conductas de trata de personas, es un elemento que se debe analizar a la luz del mencionado instrumento internacional, tal como lo ha reconocido nuestra jurisprudencia al razonar que se debe "determinar si se trata de un consentimiento libre, aceptado por una persona con plenas facultades para tomar una decisión, o existen constreñimientos que limitan su voluntad y que pueden hacer que tome una decisión que en condiciones más favorable no hubiere tomado. Esto implica, como plantea el Protocolo de Palermo, que el consentimiento no debe ser tomado en cuenta cuando se ha recurrido a cualquiera de las formas descritas en la definición de trata para efectuar el delito, es decir, la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad".

2. Conductas punibles: verbos rectores

Las conductas punibles establecidas en el artículo 411 quáter del Código Penal son las siguientes:

- **Captar:** Atraer a las víctimas. La RAE define el concepto referido como "atraer a alguien o ganar su voluntad o afecto"³⁰. En términos del delito, el verbo captar se refiere a la realización de cualquier

acción que suponga atraer la presencia de la víctima para efectos de reclutarla³¹. Así, podría ocurrir un caso de captación mediante engaño por medio de la realización de promesas de trabajo que luego no son tales³². El delito se configura independiente del medio empleado para la captación de la víctima. De tal manera, el reclutamiento puede efectuarse personalmente por los tratantes, a través de internet o avisos publicitarios, entre otros. Así, conforme lo señala la doctrina, "Tratándose de extranjeros, un ejemplo podría ser la oferta de tramitar su documentación de ingreso al país"³³.

- **Trasladar:** Trasladar a la víctima de un lugar a otro. Significa, según la RAE, "llevar a alguien o algo de un lugar a otro"³⁴. Consiste en "facilitar y lograr, a través de cualquier medio, que la víctima abandone el lugar en que se encontraba y se desplace hacia otro". Puede ser de un país a otro, de una ciudad a otra, o de un lugar a otro. Si el traslado no implica el cruce de una frontera se denomina "**trata interna**". Con ello, la legislación chilena hizo suyo lo dispuesto en el Protocolo de Palermo, que señala que la trata de personas se configura si concurre movilización dentro o fuera del propio país de la víctima, siendo

³⁰ En el mismo sentido lo ha entendido el 4º Tribunal de Juicio Oral con ocasión de la calificación jurídica de los hechos en el pronunciamiento del fallo de fecha 1 de abril de 2021, en la causa RIT 264-2020, considerando décimo.

³¹ Gajardo Orellana, T., & Torres Figueroa, A. (2011). Revista Jurídica del Ministerio Público, 47, 242. 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). En este mismo sentido sentencia dictada el 13 de diciembre de 2021, causa RIT 98-2021, considerando decimonoveno, en la que definió el verbo rector "captar" a partir de lo dispuesto en el Manual sobre la Investigación del delito de Trata de Personas de la ONU, esto es, "la captación en la trata de personas presupone reclutamiento de la víctima, atraerla para controlar su voluntad para fines de explotación".

el elemento determinante la existencia de una situación de desarraigo respecto de su comunidad de origen; limitación o privación de libertad y explotación³⁵.

La distancia recorrida no es relevante, sino la condición de **desarraigo** padecida por la víctima³⁶.

Incorre en esta acción tanto quien transporta materialmente a la víctima, como quien contribuye en dicho traslado (por ejemplo, comprando los pasajes).

Trata de origen nacional

No hay que olvidar que Chile también es un país de origen de trata de personas. Puede darse el caso que un chileno o chilena sea trasladado a otro país con fines de explotación.

Actualmente no hay investigaciones en que se esté buscando una víctima de origen nacional en otro país, sin embargo si hay evidencia de que hay víctimas chilenas en el extranjero*.

En atención a lo anterior, en denuncias por presunta desgracia podrían encontrarse antecedentes sobre este tipo de hechos. Preguntas tales ¿Qué le prometieron para irse? ¿Cómo la contactaron? ¿Tienen dificultades para comunicarse con la víctima? Nos podrían dar indicios de que los hechos coinciden con el delito de trata de personas.

* Información proporcionada en entrevista con My Lo. de ONG Polaris Project.

entendido por acogida el acto de recibir en forma transitoria o como destino final a la víctima³⁷

- **Recibir:** Definida, entre otras, como “tomar lo que le dan o le envían” o “hacerse cargo de lo que le dan o le envían”, la conducta dice relación con una que “usualmente seguirá a un traslado, pues se recibe a alguien que no estaba, y luego llega.”³⁸

Tanto acoger como recibir son acciones que implican procurar los medios para la subsistencia de la víctima en un lugar determinado³⁹. La jurisprudencia ha precisado que “el término se enfoca en el recibimiento de víctimas de trata de personas. El receptor las oculta en un escondite temporal en tanto se reanuda

³² En ese sentido ha fallado el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). Sentencia dictada el 1 de abril de 2021, causa RIT 264-2020, considerando quinto.

³³ Cárdenas Aravena, C. (2013). Informes en Derecho, 12, 153

³⁴ En el mismo sentido lo ha entendido el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). Sentencia dictada el 1 de abril de 2021, causa RIT 264-2020, considerando décimo.

³⁵ Con ello se realiza un cambio de paradigma respecto al antiguo artículo 367 bis del Código Penal, que sólo sancionaba a quienes promovieron o facilitaron la entrada o salida del país de personas que ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, dejando fuera del alcance de la norma a quienes ejercieran acciones similares al interior del territorio del país. Véase Gajardo Orellana, T., & Torres Figueroa, A. (2011, p. 242).

³⁶ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2009). Manual sobre la Investigación del Delito de Trata de Personas. Costa Rica. En el mismo sentido, véase la sentencia dictada por el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). Sentencia dictada el 1 de abril de 2021, causa RIT 264-2020, considerando décimo.; Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt. (2024). Sentencia dictada el 21 de junio de 2024, causa RIT 18-2024 y 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2023). Sentencia dictada el 2 de noviembre de 2023, causa RIT 319-2023.

³⁷ En ese sentido ha fallado el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). Sentencia dictada el 1 de abril de 2021, causa RIT 264-2020. Considerando quinto. Véase también 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). Sentencia dictada el 13 de diciembre de 2021, causa RIT 98-2021. Considerando décimo noveno.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid, considerando décimo noveno, para quien “acoger” o “recibir”,

el viaje hacia el destino final o las recibe y mantiene en el lugar de explotación”.⁴⁰

Finalmente, el inciso final del artículo 411 quáter incluye otras tres conductas típicas, que acarrear las mismas penas que las del autor del delito⁴¹:

- **Promover:** La RAE la define como “impulsar el desarrollo o la realización de algo” o “tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo”, que en este caso sería captar, trasladar, acoger o recibir⁴².
- **Facilitar:** Se define como “hacer fácil o posible la ejecución de algo o la consecución de un fin.” Incurren en esta conducta, por ejemplo, quienes obtienen los documentos migratorios, o quienes contactan a “clientes” en casos de explotación sexual.
- **Financiar:** Según la RAE, “aportar el dinero necesario para el funcionamiento de una empresa”. La doctrina ha precisado que “la inclusión de esta conducta persigue (y consigue) claramente castigar al gestor financiero como autor”.⁴³

se define como “admitir en su casa a alguien” y cita el Manual de la ONU, para el que el término “se enfoca en el recibimiento de víctimas de trata de personas. El receptor las oculta en un escondite temporal en tanto se reanuda el viaje hacia el destino final o las recibe y mantiene en el lugar de explotación”. Véase, en esa misma línea, la siguiente jurisprudencia: Juzgado de Garantía de Molina. (2013). Sentencia dictada el 27 de noviembre de 2013, causa RIT 760-2013, considerando sexto.

⁴⁰ 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). Sentencia dictada el 13 de diciembre de 2021, causa RIT 98-2021. Considerando decimonoveno.

⁴¹ Cárdenas Aravena, C. (2013). Informes en Derecho, 12, 154

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Para MATUS y RAMÍREZ, ob. cit., p. 253, se trataría de un delito de tendencia que requiere que las conductas típicas tengan por

3. La finalidad de explotación en el delito de trata de personas

Además del requisito de la concurrencia de dolo, el delito de trata de personas exige para su configuración, a saber, la **finalidad con la cual se ha cometido el delito**⁴⁴, consistente en que la víctima sea objeto de alguna forma de explotación sexual, de trabajos o servicios forzados, de servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a éstas o de extracción de órganos.

Las finalidades que se expondrán “tienen en común pretender la explotación de la persona que sufre la trata”. En términos generales, “la explotación puede referirse (neutralmente) a hacer uso o derivar beneficio de una cosa o situación” o bien tomar ventaja de una persona para fines propios⁴⁵. Si bien no hay una definición legal del término “explotación”, en el Protocolo de Palermo contra la trata de personas se emplea la expresión para describir condiciones duras y abusivas, que atentan contra la integridad moral y la dignidad de la víctima⁴⁶. En otras palabras, la explotación consiste básicamente en la utilización de una persona en provecho (económico) propio⁴⁷.

objetivo algún tipo de explotación, sin que sea necesaria la efectiva explotación de la o las víctimas para la punibilidad del hecho. De la misma manera lo ha estimado el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en sentencia dictada el 7 de septiembre de 2012, en causa RIT 199-2012, considerando undécimo.

⁴⁵ UNODC. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Documento temático. El concepto de “explotación” en el protocolo contra la trata de personas. Naciones Unidas, Viena, 2015, pág. 18.

⁴⁶ Cárdenas Aravena, C. (2013). Informes en Derecho, 12, 157.

Gajardo Orellana, T., Guzmán Valenzuela, K., & Suazo Schwengke, C. (2012). Interpretación Jurisprudencial de los Principales Tipos Penales Contenidos en la Ley 20.507. Revista Jurídica del Ministerio.

⁴⁷ Gajardo Orellana, T., Guzmán Valenzuela, K., & Suazo Schwengke, C. (2012). Interpretación Jurisprudencial de los Principales Tipos Penales Contenidos en la Ley 20.507. Revista Jurídica del Ministerio Público, 53, 203. Disponible en <http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/biblioteca/juridica.do>.

Por cierto, cabe hacer presente que no es necesario que la situación de explotación se haya verificado para efectos de tener por configurado el delito⁴⁸.

Para entender la explotación, tenemos un caso conocido por nuestros tribunales:

Un conjunto de mujeres de nacionalidad paraguaya fueron ingresadas a Chile, captadas por una oferta laboral, consistente en ejercer la prostitución en nuestro país. Su ingreso al país fue promovido y facilitado mediante el envío a Paraguay de la suma de dinero necesaria para que realizaran el viaje y luego eran recibidas en un departamento en la ciudad de Santiago, lugar en el que debían ejercer la prostitución. Asimismo, sus datos eran publicados en una página de oferta de servicios sexuales. Las condiciones en las que debían ejercer la prostitución eran impuestas y controladas por la imputada, quien, además, recibía las ganancias obtenidas por los servicios sexuales⁴⁹.

Dicho caso resulta fundamental para ilustrar lo que se debe entender por explotación, toda vez que el tribunal respectivo razonó que

la finalidad de explotación sexual se refiere a la finalidad de *“obtención de beneficios económicos o financieros, a través de la participación no voluntaria y continua de otra persona en actos de prostitución”*, resolviendo que se configuraba este elemento en el caso pues la acusada ejecutó actos tendientes a la captación, acogida, traslado y recepción de las víctimas, haciéndoles una oferta de trabajo y quedándose con la mitad de las ganancias, controlándolas en sus movimientos y en el ejercicio de la prostitución, mediante el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad para así obtener réditos económicos⁵⁰.

A su vez, el citado caso es relevante en atención a la valoración que hace el tribunal sobre el consentimiento de las víctimas, pues, en línea con la normativa internacional, no se tomó en consideración para desestimar la situación de explotación sexual el hecho de que las víctimas hubieran consentido de ingresar a Chile con conocimiento de que venían a ejercer la prostitución.⁵¹

La propia norma del inciso primero del artículo 411 quáter, prevé las finalidades para la configuración del delito de trata de personas. Estas dicen relación con que la conducta debe ser realizada con fines de:

⁴⁸ Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique. (2020). Sentencia dictada el 17 de febrero de 2020, causa RIT 927-2019, considerando undécimo.

⁴⁹ Véase en detalle la sentencia dictada por el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). Sentencia dictada el 13 de diciembre de 2021, causa RIT 98-2021.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid. considerando décimo noveno.

- A. Explotación sexual, incluyendo la pornografía:** Situación en que un tercero obtiene beneficios económicos o de otra índole por medio de la prestación forzada de la prostitución por parte de la víctima, incluidos actos de pornografía y la producción de materiales pornográficos.⁵²

Se trata de la finalidad más recurrente en Chile y en el mundo. En Chile, de hecho, un 69% de los casos de trata identificados, desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.507 (2011) hasta el 2023, son cometidos con dicha finalidad.

- B. Trabajos o servicios forzados:** Según el artículo 2° del Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo forzoso, de 1930, la expresión implica “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.” Se ha señalado, que la pena a la que se alude en la definición entregada por la OIT no debe consistir necesariamente en una sanción penal, sino que puede consistir en una pérdida de derechos⁵³.

En la trata de personas con fines de trabajos o servicios forzados, la clave para identificar este tipo de trata es, entre otros factores, que la libertad del trabajador para marcharse o poner término a la relación laboral se encuentra limitada⁵⁴.

⁵² Véase en sentencia dictada por el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). Sentencia dictada el 13 de diciembre de 2021, causa RIT 98-2021, considerando décimo noveno. Anteriormente, el mismo tribunal ya había sostenido aquella concepción de explotación sexual en la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2012, en causa RIT 287-2012.

Ocho ciudadanos haitianos, en situación migratoria irregular, fueron captados por un chileno con la promesa de trabajo formal. Trasladados a Puerto Natales, sus pasaportes fueron retenidos, y las condiciones laborales cambiaron arbitrariamente, descontándoles alimentación e indumentaria de sus sueldos. Fueron llevados a un lugar aislado, sin servicios básicos ni transporte, y obligados a trabajar de lunes a domingo en condiciones precarias, con salarios inferiores a los de trabajadores chilenos. Además, eran amenazados con la no formalización de contratos si no cumplían con las exigencias, por lo que serían expulsados del país⁵⁵.

⁵³ Véase Cárdenas Aravena, C. (2013). Informes en Derecho, 12, 159. Además, en ese mismo sentido lo ha considerado el 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en sentencia dictada el 22 de enero de 2018, en causa RIT 208-2017, quien razona considerando lo dicho por la Comisión de Expertos de la OIT en el año 2001, para quienes la sanción puede consistir en la pérdida de un derecho o privilegio e indica cuales son, entre ellos, la retención de salarios total y luego parcial; aplicando dicho criterio en el caso en cuestión, pues no se pagó lo convenido y, además, se les confiscó el pasaporte a las víctimas, atentando ello contra la libertad.

⁵⁴ Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2009). El trabajo forzoso y la trata de personas. Manual para inspectores del trabajo. Disponible: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_107704.pdf [Visto: 27-01-2025].

⁵⁵ Véase sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas. (2023). Sentencia dictada el 20 de abril de 2023, causa RIT 8-2023.

Libertad de trabajo debe entenderse bajo dos aspectos: por una parte, el derecho de toda persona de no ser forzada a desarrollar una labor, la que sólo puede ser ejecutada con su consentimiento previo y libre, y, por otra, la libertad de contratación y la libre elección del trabajo, que consiste en la facultad de toda persona de escoger sin sujeción o concurso del otro, el momento, la persona, la labor y las condiciones en que contratará sus servicios laborales, con sujeción a los límites establecidos en la ley.⁵⁶

En esta misma línea ha ido nuestra jurisprudencia cuando ha establecido que “Los trabajos forzados, a que se debieron aplicar los afectados, han quedado caracterizados por la retención de sus documentos personales, la imposibilidad de que los trabajadores se comunicaran con terceros, las extensas jornadas de trabajo a la que eran sometidos sin descanso razonable y legal, la falta de pago y el aislamiento, aumentado por las diferencias socioculturales de los ofendidos con el medio local.”⁵⁷

C. Esclavitud: Según refiere el artículo 1 de la Convención sobre la Esclavitud de 1926, se entiende por tal “el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos⁵⁸.”

D. Servidumbre y otras prácticas análogas a la esclavitud: De acuerdo con los artículos 7 y 1 de la Convención Suplementaria sobre Abolición de la Esclavitud, Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud de 1956, promulgada en Chile en 1995, dentro de las prácticas análogas a la esclavitud se encuentran la servidumbre por deuda⁵⁹, por gleba⁶⁰ y otras formas de cosificación⁶¹ de mujeres, niñas, niños o adolescentes; y consiste en el estado o condición de dependencia de una persona a la que otra obliga, sin justificación alguna, a prestar cualquier servicio y que crea razonablemente que no tiene otra alternativa que la de prestar ese servicio.

E. Extracción y/o venta de órganos: Se ha entendido que esta conducta debe tener un carácter pecuniario, debiendo el autor proporcionar u ofrecer una prestación

⁵⁶ Ord. N° 1279/019 de 17.03.2006, de la Dirección del Trabajo.

⁵⁷ Véase sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno (2018). Sentencia dictada el 14 de junio de 2018, en causa RIT 136-2017, considerando séptimo.

⁵⁸ Convención de las Naciones Unidas sobre la Esclavitud. (1926). Artículo 1.

⁵⁹ Artículo 1 a): “La servidumbre por deudas, o sea, el estado o la condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios”.

⁶⁰ Artículo 1 b): “La servidumbre de la gleba, o sea, la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición”.

⁶¹ Artículo 1 c): “Toda institución o práctica en virtud de la cual, i) Una mujer, sin que la asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie entregada a sus padres, a su tutor, a su familia o a cualquier otra persona o grupo de personas;

ii) El marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen el derecho de cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera;

económica con el objeto de obtener un órgano para su extracción⁶².

4. Sujeto activo: ¿Quiénes pueden ser tratantes?

Cualquier persona, nacional o extranjera, que incurra en las conductas prohibidas (véase punto 2 precedente), puede ser sujeto activo del delito de trata de personas.

El legislador nacional recogiendo la experiencia observada en otros países optó por tipificar en el artículo 411 quinquies del Código Penal el delito de asociación ilícita para la comisión del delito de trata de personas. De manera acertada, pues en el último tiempo, se ha observado efectivamente la concurrencia de organizaciones criminales en la comisión de la trata de personas en nuestro país, como en el caso de explotación sexual ocurrido en la ciudad de Puerto Montt, en donde se acreditó que una asociación ilícita conformada por 4 personas se organizó con el fin de captar, trasladar y acoger a mujeres venezolanas con el fin de explotarlas sexualmente.

Es importante destacar, que con la dictación de la Ley N° 21.325 que modificó el artículo 1 de la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, resulta posible imputar a una persona jurídica el delito contemplado en el artículo 411 quáter.

5. Sujeto pasivo: ¿Quiénes pueden ser víctimas de trata de personas?

Cualquier persona puede ser víctima de este delito. **No es necesario, para su configuración, que la víctima sea extranjera.**

La ley también cubre aquellos casos en que personas chilenas son captadas y trasladadas desde Chile a otros países, para ser explotadas en otras jurisdicciones; así como casos de trata de chilenas o chilenos, trasladados y explotados dentro del territorio nacional.

PERSPECTIVA DE GÉNERO INTERSECCIONAL:

En este delito juegan un rol fundamental las brechas e inequidades de género. Un número importante de víctimas corresponde a mujeres, niñas y adolescentes. Sin ir más lejos, según el Informe Estadístico, del total de víctimas identificadas entre 2011 y 2023, el 60% son mujeres. Dentro de este porcentaje, el 70,8% corresponde a explotación sexual.

Dicho fenómeno se debe, entre otros factores, a la feminización de la migración a nivel global, que expone a un gran número de mujeres a convertirse en víctimas de trata⁶³. Esto último, atendido que muchas mujeres provienen de sociedades discriminatorias en las que el rol de la mujer se encuentra limitado a labores domésticas, estando más expuestas

iii) La mujer, a la muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia a otra persona"; y
Artículo 1 d): "Toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven menor de dieciocho años es entregado por sus padres, o uno de ellos, o por su tutor, a otra persona, mediante remuneración o sin ella, con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño o del joven."

⁶² Matus, J. P., & Ramírez, M. C. (2021, p. 254).

⁶³ Véase sentencia dictada por el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). Sentencia dictada el 1 de abril de 2021, causa RIT 264-2020. Considerando quinto.

al fenómeno de la pobreza, por lo que buscan mejores oportunidades en otros países⁶⁴.

Lo anterior ha sido destacado y reconocido expresamente en parte de nuestra jurisprudencia⁶⁵ al resolver y condenar por delitos de trata con fines de explotación sexual, analizando los elementos del tipo penal a la luz de la normativa internacional pertinente en la materia; esto es, al ya referido Protocolo de Palermo, a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)⁶⁶, a la Declaración sobre eliminación de la violencia contra la mujer⁶⁷, y a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem Do Pará).⁶⁸

En tal sentido, **resulta necesario abordar este tipo de investigaciones con perspectiva de género**. Se debe recordar que “[en]un proceso de análisis desde el enfoque de género se incorpora la necesidad no sólo de analizar las leyes formalmente promulgadas, sino también identificar el contenido de las disposiciones legales, cómo están siendo aplicadas y la necesidad de valorar el impacto que tienen las leyes. Utilizar el enfoque de género como herramienta de análisis del fenómeno jurídico **permite comprender que las leyes no son**

neutrales y por lo tanto no tienen iguales efectos en hombres y mujeres pues la historia nos ha demostrado que sólo formalmente somos iguales ante la ley.”⁶⁹

Lo anterior se encuentra íntimamente vinculado con el derecho de las víctimas mujeres al acceso de la justicia, resultando esencial para ello que las investigaciones sean conducidas con enfoque y perspectiva de género interseccional. Sobre este punto se debe destacar que “ el acceso a la justicia, es para el género femenino –sobre todo en el caso de las mujeres con menos recursos económicos– garantizar que la información sobre materias legales y jurídicas llegue oportuna y claramente a las mujeres, tomando previsiones para el caso de mujeres con un nivel educacional inferior, que pueden tener mayores dificultades de comprensión o menor acceso al asesoramiento jurídico.”⁷⁰

En definitiva, en la investigación y juzgamiento del delito de trata de personas resulta imprescindible el reconocimiento y la consideración –en cada una de las etapas del proceso– de la posición de desigualdad en la que se encuentran y la discriminación de género de la que son víctimas mujeres, niñas y adolescentes.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Véase sentencia dictada por 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2021). Sentencia dictada el 13 de diciembre de 2021, causa RIT 98-2021. Considerando decimonoveno.

⁶⁶ Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y que en Chile se establece como ley, mediante el Decreto N° 789, promulgado el 27 de octubre de 1989, que define y condena toda forma de discriminación contra la mujer y obliga a los estados parte a tomar las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer.

⁶⁷ Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (1993). Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

⁶⁸ Entró en vigencia a nivel internacional el 5 de marzo de 1995, y se promulgó en Chile mediante Decreto N° 1640 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 11 de noviembre de 1998.

⁶⁹ Poder Judicial de Chile. (s.f.). Igualdad de Género y No Discriminación. Proyecto de Estudio Diagnóstico de la perspectiva de Igualdad de Género en el Poder Judicial Chileno. Dirección de Estudios, Corte Suprema.

⁷⁰ Ibid.

III. Trata de personas vs. tráfico de migrantes

Sin perjuicio de que ambos delitos son independientes y autónomos, es habitual encontrar casos en los que se vinculan directamente.

El delito de tráfico ilícito de migrantes se encuentra regulado en el artículo 411 bis del CP⁷¹ y se diferencia del delito de trata de personas, principalmente, en los elementos que a continuación se exponen:

	TRATA DE PERSONAS	TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
Objetivo del delito	Explotación.	Ingreso ilegal.
Beneficios para el imputado	Proviene de la explotación de la víctima	Proviene de la facilitación o promoción de la entrada ilegal al país.
Consumación	Es un proceso de varias etapas. Se consuma con cualquiera de los verbos rectores, esto es captar, trasladar, acoger o recibir. No siendo necesario que se presenten todos juntos, con uno de ellos es suficiente.	El delito se consuma con promover o facilitar el ingreso ilegal, por lo que no es necesaria la entrada ilegal efectiva, si no sólo su promoción o facilitación.
Consentimiento	La víctima no consiente libremente a la situación de explotación.	El migrante consiente en su ingreso, no necesariamente conoce que éste es ilegal.
Cruce de frontera	No es necesario	Es necesario

⁷¹ Código Penal de Chile. Artículo 411 bis CP. "Tráfico de migrantes. El que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente, será castigado con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. [...] Por entrada ilegal se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente a Chile."

IV.

Buenas prácticas en la investigación del delito de trata de personas

1. Inicio de la investigación

Las investigaciones por trata de personas pueden iniciarse por:

- Denuncia de las propias víctimas
- Denuncia o querrela de terceros, (sean particulares o funcionarios públicos)
- De oficio

Lo importante es no desechar ninguna información y hacer las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

2. Cómo proceder si la víctima no desea denunciar

En algunos casos las víctimas no desean denunciar los hechos, por temor a represalias de los y las tratantes quienes pueden haber amenazado a la persona con represalias contra su familia o cercanos. Asimismo, pudiere ser que existieren funcionarios públicos actuando concertadamente con los tratantes, generando una red de protección de los mismos, la que siendo conocida por la víctima pudiere inhibir aún más la presentación de una denuncia. Las personas víctimas de trata tienen derecho a no querer realizar la denuncia, esto sin perjuicio del deber de los funcionarios públicos de denunciar y del Ministerio Público de iniciar investigación de oficio si toma conocimiento de hechos que revisten características de delito.

Frente a esta situación, y para efectos de levantar antecedentes del caso, se sugiere extraer del relato de la persona la información relevante y, en caso de ser funcionario/a

público/a, realizar la respectiva denuncia ante las autoridades competentes, tomando las precauciones del caso en cuanto a que la autoridad a quien deba denunciarse no se encuentre implicada en la comisión del delito o forme parte de una red de protección de los tratantes⁷². Lo anterior es relevante a fin de proveer protección a la víctima y la identificación y rescate de otras víctimas.

De conformidad al criterio de actuación señalado a los fiscales y profesionales de URUVIT en el oficio del Fiscal Nacional en esta materia, se dispone que las víctimas de trata de personas son atendidas por la URUVIT a fin de poder evaluar sus necesidades proteccionales y de prestaciones. Tratándose de NNA, en la denuncia, investigación y juzgamiento, deberán someterse a lo dispuesto en la Ley N°21.057, especialmente respetando el principio de evitar la victimización secundaria.

3. Fiscal Especializado en investigaciones complejas y contacto permanente

En atención a las particulares características de este ilícito, se hace necesaria la participación de un/una Fiscal especializado/a con experiencia en investigaciones complejas, lo que ha probado haber contribuido al éxito de las investigaciones por trata de personas.

⁷² En caso de que se obtenga algún antecedente por parte de la/s víctimas en relación con la participación de un funcionario público como parte de la organización criminal o que forme parte de una red de protección, se sugiere efectuar la denuncia ante las autoridades centrales y no locales, evitando cualquier tipo de represalias en contra de la/s víctima/s.

4. Notificación a la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas y Lavado asociado.

5. Contacto permanente con las policías.

El contacto permanente de los funcionarios policiales con el Ministerio Público, y desde el inicio de la investigación, permite la rápida gestión de autorizaciones judiciales y facilita el desarrollo de las investigaciones.

6. Atención y protección a víctimas.

Las víctimas de este delito requieren de una orientación, protección y apoyo que corresponde proporcionar a la respectiva URAVIT, por lo que deben adoptarse las medidas necesarias, en forma oportuna para proporcionar esta protección, sin perjuicio de lo que se detallará en el acápite respectivo.

Es por ello, que, por medio de la ratificación de la Convención de Palermo y su Protocolo, el Estado de Chile se obligó a adoptar todas las medidas necesarias para prestar una debida asistencia y protección a las víctimas de este delito, según dispone el artículo 6.

Por otro lado, el Ministerio Público tiene la obligación constitucional y legal de proteger a víctimas y a testigos. Dicha obligación también se extiende a las policías, quienes deben prestar auxilio a las víctimas, según dispone el artículo 83 del Código Procesal Penal.

La Ley N° 20.507, incorpora en el Código Procesal Penal el artículo 78 bis, que refuerza la obligación del Ministerio Público de adoptar medidas de protección, o solicitarlas, en su caso, para estas víctimas teniendo presente la particular condición de vulnerabilidad que las afecta. Asimismo, esta norma dispone que los organismos de protección de la infancia y adolescencia faciliten el acceso a las prestaciones especializadas a las víctimas niñas, niños y adolescentes.

En virtud de los tratados internacionales suscritos por Chile, tales como el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos⁷³ y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica⁷⁴; es deber del estado de Chile garantizar a las personas el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación. Los estándares generales de este derecho son: buen trato, información, participación, protección, y apoyo, entre otros.

Tratándose de víctimas NNA, desde el inicio de la investigación, su protección asistencia y abordaje prioritario deben sujetarse a las normas especiales previstas en la Ley N°21.057 sobre entrevista investigativa video grabada, la Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, como normas especialísimas, según se expone en la Ley N°21.523 sobre garantías procesales, protección los derechos de las víctimas de los delitos sexuales, y evitar su revictimización.

⁷³Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (1966). Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966.

⁷⁴Ibid.

6.1 Garantía de protección sobre situación migratoria

En el ámbito migratorio, la Ley Nº 21.325, de Migración y Extranjería, que sustituyó la Ley de Extranjería, contenida en el Decreto Ley 1094 de 1975, contempla en el artículo 71 el derecho a solicitar una residencia temporal a las víctimas del delito de trata de personas, por un período mínimo de 12 meses, tiempo durante el cual podrán decidir si ejercen acciones civiles o penales. Adicionalmente, se establece el derecho a la no repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir grave peligro para ellas en sus lugares de origen.

6.2 Atención a víctimas.

• Primera acogida

Cuando una funcionaria o un funcionario policial toma contacto con una víctima del delito de trata de personas, es importante que tenga presente que ese primer encuentro, y su comportamiento, será crucial e incidirá directamente en el bienestar y protección de la víctima, como también en su disposición para participar del proceso penal.

Las víctimas necesitan:

- Sentirse a salvo.
- Expresar sus emociones.
- Conocer el procedimiento.

Las consideraciones que a continuación se exponen son relevantes para el adecuado trato de las víctimas por parte de las funcionarias y funcionarios policiales. Se hace presente, en cualquier caso, que estas consideraciones no son indicadores de detección del delito.

Características especiales de las víctimas de trata de personas:

Las víctimas del delito de trata de personas presentan características que suelen diferenciarlas de otras víctimas⁷⁵:

● Vulnerabilidad

- Suelen proceder de otra cultura y de países con altos índices de pobreza y/o inestables políticamente, o bien, escapando de situaciones de violencia de género.
- Desconocen el idioma, dificultando su comunicación.
- Están indocumentadas, por lo que sienten temor de revelar su situación migratoria.
- Carecen de red familiar y/o social de apoyo.
- Han sufrido violencia física o psicológica.
- Son desconfiadas, reticentes a solicitar ayuda y a aceptarla. Es muy probable que la víctima desconfíe de las autoridades, ya sea por malas experiencias en su país de origen, por temor a represalias de los tratantes o porque creen que serán deportadas o encarceladas.
- Son temerosas.

⁷⁵ Es importante hacer presente que dichas características pueden no concurrir en una persona víctima de trata, y configurarse de igual modo el delito.

- **Dificultad para reconocerse a sí mismas como víctimas**

- Pueden haber ingresado ilegalmente. Sus tratantes les hacen creer que se encuentran infringiendo la ley.
- Pueden haber participado en otros actos ilícitos.

- **Presencia de síntomas físicos que pueden dificultar su declaración⁷⁶**

Lesiones físicas y enfermedades: Las personas víctimas de Trata de personas pueden sufrir lesiones físicas debido a la violencia física infligida por los traficantes o por las condiciones de trabajo peligrosas a las que son sometidas. También pueden contraer enfermedades debido a la falta de atención sanitaria adecuada o a la exposición a condiciones insalubres.

Problemas de salud sexual y reproductiva: Las víctimas de Trata sexual pueden desarrollar enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos inseguros y complicaciones relacionadas con la salud reproductiva.

Adicciones y abuso de sustancias: En ocasiones las personas víctimas de Trata podrían ser obligadas a consumir drogas o alcohol, como una de las tantas formas de control por parte de los traficantes. Esto puede llevar al desarrollo de adicciones y problemas de abuso de sustancias.

Trastornos alimenticios y desnutrición: Las víctimas de trata pudieran ser

privadas de alimentos adecuados o al no consumo de alimentos que, al mantenerse por largos periodos de tiempo, se podría desarrollar un cuadro de desnutrición. Además, algunas personas traficadas, especialmente en la industria del trabajo forzado, pueden enfrentar condiciones de trabajo extenuantes que contribuyen a trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia.

Si se presentan síntomas, debe ser conducida a un servicio de salud previo a la declaración⁷⁷

- **Algunas características psicológicas**

Traumas emocionales y psicológicos: Las víctimas de trata experimentan traumas emocionales severos, como trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad y trastornos de la personalidad. La coerción, el abuso y la explotación a los que son sometidas pueden dejar cicatrices psicológicas profundas que requieren atención especializada y reparatoria.

⁷⁶ Oram, S., et al. (2012). Prevalence and Risk of Violence and the Physical, Mental and Sexual Health Problems Associated with Human Trafficking: Systematic Review. PLoS Medicine.

⁷⁷ Se proveerá atención a la víctima resguardando siempre satisfacer sus necesidades de salud de manera segura tanto para ella como para el equipo de salud, siguiendo los protocolos, orientaciones técnicas y normas ministeriales según aplique en todos los niveles de atención.

De forma general, ante sospecha y pesquisa se solicitarán exámenes preventivos tales como TBC- ITS/VIH- Estado nutricional- examen físico o los que correspondan.

● **Inconsistencia en su relato por:**

- Miedo a posibles represalias
- Protección a terceros
- Vergüenza
- Efectos del síndrome post traumático

Es importante identificar dichas inconsistencias y profundizar en sus causas.

Las víctimas en general no entregan relato lineal o cronológico, pueden partir con elementos de la captación, traslado o la explotación.

Recordar que, al momento de su rescate o escape, la persona está en shock y/o crisis, por lo que no le es posible recordar en forma lineal los hechos. Es probable que vayan recordando hechos en forma posterior, pero nunca debe ser obligada a recordar con exactitud los hechos.

● **Excurso: víctimas de trata y trauma**

La mayoría de las víctimas de trata habrán sufrido un episodio traumático o más y habrán adoptado tácticas psicológicas para hacer frente a los efectos de esos episodios. Para empezar a entender esas reacciones, es importante conocer antes alguna información básica sobre el “trauma”.

No hay dos víctimas de trata que sean iguales y las repercusiones que el delito tiene en cada una de ellas son diferentes. No hay que esperar que una víctima de trata lo considere su rescador/a o su salvador/a. Puede que algunas sí lo hagan, pero muchas tal vez lo consideren un/a interlocutor/a poco grato/a, que puede complicar aún más su situación que de por sí ya es muy complicada.

Las personas que han sido víctimas de la Trata de Personas se han visto expuestas a vivencias complejas, bajo intervalos de tiempo variable, algunas de ellas con eventuales situaciones traumáticas y/o consecuencias perjudiciales, que pueden presentarse debido a que los estresores provenientes de un entorno adverso podrían sobrepasar los recursos disponibles en los sujetos para enfrentar las situaciones.

Por ello, al momento de entrevistar por primera vez a una persona víctima del delito, debe considerarse que esta puede presentar TEPT⁷⁸, cuya sintomatología

⁷⁸ En 1980 se acuñó oficialmente, en la terminología psiquiátrica, la denominación de Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) en la tercera versión de la clasificación diagnóstica de la Asociación Psiquiátrica Americana (DSM-III) (1). De acuerdo al DSM-5, la presentación clínica del TEPT varía. En algunos individuos se basa en la reexperimentación del miedo, y pueden predominar los síntomas emocionales y de comportamiento. En otros serían más angustiosos la anhedonia o los estados de ánimo disfóricos y las cogniciones negativas. En otros individuos sobre salen la excitación

puede manifestarse en pérdida de memoria, lapsus, discrepancias, que pueden dar lugar a variaciones del relato en distintos momentos, imposibilidad de recordar detalles, capacidad de recordar detalles centrales de un incidente traumático, pero no detalles periféricos, como descripciones de ropas, habitaciones o vehículos. La persona tiende a ahuyentar de la mente los episodios que supusieron mayor peligro para la vida (o sea, disociación).

Para muchas víctimas existe un período de reconstrucción en el que asimilan lo que les ha ocurrido. Las víctimas reinterpretan los acontecimientos y tratan de aceptar su experiencia, de encontrar posiblemente una explicación de lo que ha ocurrido o de evaluar el episodio.

● **Comportamiento de víctimas sometidas a estrés post traumático**

Siguiendo la explicación anterior, el comportamiento de las víctimas de trata frente a los auxiliares de la administración de justicia podría presentar las siguientes características:

- Ser hostil, ambivalente y poco colaborativo.
- Presentar lapsus y discrepancias en la línea narrativa.
- Presentar arrebatos de irracionalidad y ansiedad.
- Presentar alteraciones en la percepción del o la tratante.

Hay que considerar la importancia del reconocimiento de las alteraciones en la percepción del o la tratante, para las personas que proporcionan asistencia directa a las personas víctimas de trata. Se señala que la víctima revela preocupaciones por el/la tratante, le da atribuciones no realistas al poder del/la tratante, a veces lo/a idealiza o le está muy agradecida, siente que tiene una relación especial con él/ella y muchas veces acepta su sistema de valores o ideas.

En no pocas ocasiones la información que aporte la víctima será de manera tangencial e incluso puede contener mensajes ambivalentes (minimizando la situación, pidiendo ayuda y a continuación rechazándola).

Algunas de estas características permiten responder a la pregunta acerca de **por qué la víctima no abandona a su tratante**. Muchas veces la respuesta suele ser encontrada en la sensación de temor, pues los tratantes ejercen diversas formas de control sobre ellas. En los casos que se verán más adelante, existe un desarraigo generado por el tratante, las víctimas no conocen a nadie más en el país, no tienen a quién recurrir y creen que mantenerse junto al tratante es su única alternativa. Así, suele generarse un sentimiento de lealtad hacia el tratante, especialmente

y la externalización de los síntomas reactivos, mientras que entornos predominan síntomas disociativos. Por último, alguno individuos presentan combinaciones de estos patrones de síntomas.

cuando media una relación familiar entre víctima y victimario.

● **Derechos de las víctimas y modificaciones introducidas por la Ley N° 21523 [Ley Antonia], publicada el 31-12-2022.**

Según lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal, las víctimas tienen derecho a:

- Ser escuchadas.
- Recibir protección.
- Ser informadas.
- Evitar la revictimización.

Mediante la dictación de la Ley Antonia⁷⁹, el legislador consagró los siguientes derechos a favor de las víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual:

■ Medidas de protección en favor de la víctima y su familia dispuestas por el juez o jueza en cualquier etapa del procedimiento, incluso antes de la formalización.

■ Nuevo inciso en el artículo 109 de CPP, que contempla los siguientes derechos:

- Contar con acceso a asistencia y representación judicial;
- No ser enjuiciada, estigmatizada, discriminada ni cuestionada en su **relato**, conductas o estilo de vida;
- Obtener respuesta oportuna, efectiva y justificada;
- Realizar una investigación con

debida diligencia desde un **enfoque intersectorial, incorporando la perspectiva de género y de derechos humanos.**

- Recibir protección a través de las medidas contempladas en la legislación, cuando se encuentre amenazada o vulnerada su vida, integridad física, indemnidad sexual o libertad personal.
- Protección de sus datos personales y los de sus hijas e hijos, respecto de terceros, y de su intimidad, honra y seguridad, para lo cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento podrá disponer de las medidas que sean pertinentes.
- Participar en el procedimiento recibiendo información clara, oportuna y completa de la causa. En particular, podrán obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha información a través de un abogado;
- Que se adopten medidas para prevenir la victimización secundaria, considerando la negativa de recibir una denuncia por parte de funcionarios públicos como una infracción grave al principio de probidad administrativa;
- Que su declaración sea recibida en el tiempo más próximo desde la denuncia, por personal capacitado de Carabineros de Chile, Policía

⁷⁹ La Ley Antonia (Ley 21.523) fue promulgada con el objetivo de modificar diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y otros ilícitos y evitar su revictimización.

de Investigaciones de Chile o el Ministerio Público, y se cuente con soporte necesario para evitar que se vuelva a realizar durante la etapa de investigación, a menos que sea indispensable para el esclarecimiento de los hechos o que la víctima lo requiera.

- Además, creó el artículo 109 bis del Código Procesal Penal, que contempla medidas de protección especiales para las víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual, dirigidas a proteger la identidad, intimidad, integridad física, sexual y psíquica de éstas. Entre ellas:
 - Deber de suprimir de las actas de las audiencias todo nombre, dirección o cualquier información que sirva para identificarlas a ellas o a sus familias;
 - Prohibir a los medios de comunicación social el acceso a la sala de audiencia;
 - Prohibir a los intervinientes entregar información o formular declaraciones a los medios de comunicación social relativas a la identidad de las víctimas, entre otros.

Por otro lado, creó el artículo 109 ter del Código Procesal Penal, en el que estableció un deber de prevención de victimización secundaria, consistente en evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir las víctimas con ocasión de su interacción en el proceso penal.

6.3 Toma de declaración ante la policía de personas mayores de 18 años.

● Cuestiones generales

Lo siguiente debe ser considerado por la funcionaria o funcionario policial encargado de tomar declaración a la víctima:

- ☒ Determinar su estado de salud. Verificar estado de salud y, de ser necesario, trasladarla a un centro de asistencia.
- ☒ Verificar si hay alguna situación de riesgo inminente que le afecte y que deba ser resuelta con urgencia.
- ☒ Dar aviso inmediato al Ministerio Público, para solicitar instrucciones a la o el fiscal, y para que éste realice las respectivas coordinaciones con la jefa o jefe de URAVIT.
- ☒ Realizar las gestiones para proporcionar atención a la víctima en sus necesidades básicas (agua, alimentos, ropa, aseo personal, entre otras).
- ☒ Cuando así lo haya instruido la o el fiscal, entrevistar a la víctima, actuación que debe realizarse en un lugar seguro y, en la medida de lo posible, permitir la elección del sexo de la entrevistadora o entrevistador, quien deberá realizar la diligencia sin interrupciones (teléfonos o personas entrando y saliendo), en un lugar en el que la víctima se sienta cómoda para

revelar que ha sufrido algún abuso.

- ☒ Se considera una buena práctica la participación de asesores profesionales de la institución policial, que permitan un acercamiento con las víctimas, obtención de información y, por ende, asegurar la participación de la víctima en el proceso penal.
- ☒ Para comenzar a establecer confianza con la víctima, preséntese por su nombre y cargo para, posteriormente, explicar brevemente su trabajo, obligaciones y el porqué está hablando con ella. Preséntese como una persona que está preocupada de su bienestar.
- ☒ Haga contacto visual.
- ☒ Muéstrase comprensiva o comprensivo con su situación de vulnerabilidad (a través de frases como "la/lo comprendo... la/lo entiendo..." y/o actitudes receptivas como: escuchar activamente, respetar silencios, entre otras).
- ☒ Dar seguridad, acogida y contención. Tome este contacto como un paso potencial para mejorar la situación de la víctima.
- ☒ Explicar a la víctima su calidad de tal y que la investigación no se sigue en su contra, además de indicarle los derechos de la Ley N° 21.325 que le benefician.

- ☒ En caso de que se trate de una víctima de trata sexual, se recomienda que la declaración sea tomada por una funcionaria mujer.

● **Objetivo de la entrevista**

Al finalizar las entrevistas, las declaraciones deberían proporcionar información sobre:

- ☒ Antecedentes socioeconómicos y culturales.
- ☒ Situación familiar.
- ☒ Situación laboral.
- ☒ Solvencia económica.
- ☒ Relación con el tratante.
- ☒ Medio de contacto.
- ☒ Circunstancias que rodean la comisión del delito.
- ☒ Características de los tratantes.
- ☒ Etapas de la trata de personas: captación, traslado, acogida y explotación.
- ☒ Medios comisivos.

● **Guía orientadora**

Algunas sugerencias para el desarrollo de la entrevista son las siguientes:

- Comience con preguntas acerca de la situación personal de la víctima, por ejemplo: "¿cómo se siente?" o "¿qué necesita?, antes de entrar directamente a los hechos del delito investigado.
- Entregue orientación a la víctima respecto del proceso y sus derechos. Entre otras: toma de declaración, inicio de la investigación, medidas

de asistencia, solicitud de medidas de protección, comunicación con el consulado respectivo, entre otras.

- Restituir los derechos. Empoderar a la víctima para que esté de acuerdo en participar del proceso. Es posible que la víctima se sienta impotente frente a una autoridad de la misma manera que frente a su explotador. Esto se puede contrarrestar poco a poco, comenzando por hacer preguntas que permitan a la víctima tener una sensación de control y seguridad, como “¿quiere algo de tomar?”, “¿puedo pasar a hablar con usted?” o “¿cómo prefiere que le llame?”.
- Muestre aceptación y comprensión.
- Formule preguntas abiertas y cronológicas que tiendan a obtener los antecedentes necesarios para acreditar cada uno de los elementos del delito.
- Evite las preguntas inductivas.
- Confirme que entendieron su pregunta.
- Consulte si desea ubicar a sus familiares.
- Informe siempre a la víctima de los derechos que le asisten.

Evitar

- ✗ Preguntas directas sobre si ha sido víctima de trata de personas.
- ✗ Comprometer actos que no pueda cumplir.
- ✗ Emitir juicios de valor. Por ejemplo, preguntas del tipo: “¿Cómo es posible que haya creído eso?” o “¿no se dio

cuenta de que la estaban engañando?”. Preguntas impertinentes. (Por ejemplo, detalles de los servicios sexuales que fue obligada a prestar).

✗ Revictimización.

Sugerencias de preguntas para víctimas mayores de 18 años, en contexto distinto al pericial:

- ☒ ¿Cómo se siente? ¿Necesita algo?
- ☒ ¿Cómo fue contactada en su lugar de origen? ¿Recuerda quién la contactó?
- ☒ ¿Por qué medio?
- ☒ ¿Qué le prometieron?
- ☒ ¿Recuerda quién pagó los pasajes para su traslado?
- ☒ ¿Quién gestionó su pasaporte?
- ☒ ¿Qué países cruzó antes de llegar a Chile?
- ☒ ¿Sabe quién financió su estadía y su alimentación?
- ☒ ¿Le dijeron qué debía decir a las autoridades chilenas en los pasos fronterizos /en el aeropuerto?
- ☒ ¿Recuerda quién la trasladó de un punto a otro? ¿Por qué medio de transporte fue trasladada?
- ☒ ¿Recuerda quién la recibió? ¿Dónde fue?
- ☒ ¿Le indicaron qué debía hacer en Chile?
- ☒ ¿Cuál fue el trabajo que tuvo que realizar? ¿En qué circunstancias?
- ☒ ¿La dejaban desplazarse libremente?
- ☒ ¿La dejaban relacionarse con otras personas? Con qué frecuencia, bajo qué circunstancias, por qué medio,

etc.

- ☒ ¿Puede comunicarse con su familia?
- ☒ ¿Ha sido golpeada/o?
- ☒ ¿Tiene sus documentos de identidad?
- ☒ ¿Ha recibido salario desde su ingreso a Chile?
- ☒ ¿Tiene deudas? ¿Cómo las paga?
- ☒ ¿Ha sido privada/o de alimentos?
- ☒ ¿Dónde vive actualmente? ¿En qué condiciones?
- ☒ ¿Usted puede salir cuando quiera o tiene que pedir permiso?
- ☒ ¿Tiene llaves del lugar donde vive?
- ☒ ¿Usted porta su pasaporte/DNI/carnet de identidad?
- ☒ ¿Cuáles son sus días de descanso?
- ☒ ¿Cuáles son sus horarios de descanso?
- ☒ ¿En qué condiciones trabaja?
- ☒ ¿Dónde duerme y dónde come?
- ☒ ¿Hace cuánto tiempo que no visita un doctor?

● Otras consideraciones de relevancia

- Determinar si existen otras víctimas.
- Asegurar medidas de protección en caso de ser requeridas.
- Proteger la identidad de las víctimas, individualizándolas con sus iniciales o un código numérico.

● Intérpretes

En el caso de una víctima que no hable castellano, y ningún funcionario/a policial domine el idioma de la víctima, deberán realizarse las gestiones tendientes a obtener los servicios de un intérprete a través del Servicio Intérprete (VISOR) del Ministerio Público.

● Prueba Anticipada

Si al ser entrevistada la víctima manifiesta el deseo de retornar a su país de origen u otro país en que tenga familia, se deberá informar al/la fiscal a cargo para realizar las gestiones necesarias para efectuar aquel retorno de manera segura y protegida y, evaluar formalizar la investigación para rendir declaración judicial anticipada. Lo mismo aplicará para el caso que la víctima señale que no desea declarar en nuevas oportunidades durante el proceso penal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 ter del C.P.P.

6.4 Situación especial de las niñas, niños y adolescentes

Como se señaló, en el caso de niñas, niños y adolescentes, las leyes N° 21.057 y 21.430 contienen normas especialísimas a su respecto:

● Inicio de la investigación:

Especialidad y prioridad de abordaje. Tratándose de víctimas niños, niñas y adolescentes víctimas, el fiscal y los/as funcionarios/as involucrados/as en el proceso penal, en especial en etapas de inicio de la investigación deben

⁸⁰ Ley N° 21.057. (2018). Prevención de la victimización secundaria. Chile. Art. 3: Prevención de la victimización secundaria. Constituye un principio rector de la presente ley la prevención de la victimización secundaria, para cuyo propósito las personas e instituciones que intervengan en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento procurarán adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad física y psíquica, así como la privacidad de los menores de edad. Asimismo, procurarán la adopción de las medidas necesarias para que las interacciones descritas en la presente ley sean realizadas de forma adaptada al niño, niña o adolescente, en un ambiente adecuado a sus especiales necesidades y teniendo en cuenta su madurez intelectual y la evolución de sus capacidades, asegurando el debido respeto a su dignidad personal.

resguardar su interés superior, autonomía progresiva, participación voluntaria, procurando en todo momento evitar su **victimización secundaria**⁸⁰, adoptando todas las medidas necesarias para proteger su integridad física y psíquica y su privacidad, adoptando medidas para que dicha interacción sea en un ambiente adecuado a su madurez y evolución.

Asimismo, las denuncias por delitos de trata que involucren a niños, niñas y adolescentes tendrán tramitación prioritaria. Esto se realizará conforme a los estándares establecidos en el artículo 4 de la Ley N° 21.057, que garantiza un trato adecuado y protección durante el proceso judicial para evitar la revictimización, y su Protocolo A, que detalla las medidas específicas para resguardar su bienestar. Además, se aplicarán las disposiciones de los artículos 2, letra g), y 16 de la Ley N° 21.430, que establecen la obligación de dar prioridad a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y asegurar su protección integral.

● **Protección y asistencia:**

Tratándose de niños, niñas y adolescentes víctimas, recibida la denuncia, el/la fiscal determinará todas las medidas tendientes a protegerle y asistirle, dentro de un plazo máximo de 24 horas debiendo en su caso informar al juzgado de familia o juez de garantía competente de manera inmediata y por la vía más expedita la adopción de medidas de protección en su favor que sean necesarias conforme a lo

mandata el artículo 4 de la Ley 21.057.

Tratándose de niños, niñas y adolescentes víctimas no preguntar sobre hechos y participación, pues estas son materias que se abordan en la entrevista investigativa videograbada, y en caso de dar el NNA un relato espontáneo dejar registro de lo indica de manera textual y de comportamiento no verbal.

Del mismo modo, y conforme a lo previsto por el artículo 78 bis del Código Penal y en especial lo previsto en los artículos 16 y 21 de la Ley N° 21.430, debe darse estricto cumplimiento al principio de **intersectorialidad**, para resguardar el ejercicio de sus derechos de manera tal que las instituciones de protección de la infancia y adolescencia faciliten el acceso a las prestaciones especializadas y de protección integral de los derechos de víctimas niñas, niños y adolescentes.

● **Prueba Anticipada**

Si al ser entrevistada la víctima manifiesta el deseo de retornar a su país de origen u otro país en el que se encuentren sus cuidadores, se deberá informar al/la fiscal y profesional URUVIT a cargo para realizar las gestiones necesarias para efectuar aquel retorno de manera segura y protegida y, evaluar formalizar la investigación para rendir declaración judicial anticipada de conformidad con el artículo 16 de la Ley N° 21.057.

7. Entrada, registro y rescate de víctimas

Una vez que se ha instruido por parte de la Fiscalía la entrada y registro al lugar donde se encuentre la víctima, se deben atender las siguientes recomendaciones:

- En la medida de lo posible, antes del ingreso, tener certeza de dónde serán acogidas las víctimas después del rescate.
- Procurar la separación completa de la víctima con el tratante.
- Brindar a las víctimas medidas de atención primaria (asistencia médica y protección física).
- Establecer la identidad de la víctima. En caso de que no hable castellano, coordinar con el Ministerio Público el traductor o intérprete.
- Explicar el procedimiento policial que se está desarrollando.
- Rescatar las pertenencias de las víctimas. El/la funcionario/a policial debe tener especial cuidado en retirar o permitir que las víctimas lleven consigo sus efectos personales. Las probabilidades que una víctima escape con todos sus artefactos personales o que pueda buscarlos después de la denuncia, son casi nulas, por lo tanto éste es el único momento para resguardarlos.
- Concurrir con otros/as funcionarios/as públicos/as. El Ministerio Público puede estimar conveniente coordinar la concurrencia de otras instituciones públicas como fiscalizadores del trabajo o personal de salud, cuya intervención se supeditará al término

de la entrada efectuada por la policía, para efectos de no contaminar el sitio del suceso y de seguridad⁸¹.

“Al examinar el lugar del delito de trata de personas, usted debería tratar de encontrar pruebas de incidentes en que haya habido agresión, y cómo se ha controlado y explotado a esas personas”

FirstAid Kit. P.11

8. Desarrollo de la investigación y técnicas especiales de investigación

8.1 Algunas buenas prácticas en materia de investigación

Sin que la siguiente enumeración pretenda ser exhaustiva, se enuncian algunas buenas prácticas en materia de diligencias investigativas:

● Equipo policial especializado y comprometido

Resulta fundamental para el éxito de las investigaciones, que las funcionarias y funcionarios no solo se encuentren debidamente capacitados en el trabajo investigativo de este tipo de delito, sino que también estén comprometidos con el éxito de la investigación.

⁸¹ UNODC. (2009). Manual sobre la Investigación del Delito de Trata de Personas (pp. 139-140). Costa Rica.

- **Vigilancias y seguimientos respaldados de manera audiovisual en lugares de libre acceso al público**

Los videos constituyen un importante medio de prueba para la acreditación del delito en el juicio oral, sobre todo cuando se logra registrar a los imputados incurriendo en alguna de las conductas prohibidas por el tipo penal.

- **Levantamiento de información desde redes sociales**

La revisión de información que se pueda recabar desde redes sociales abiertas de víctimas y, sobre todo, de imputados ha sido de utilidad para establecer vínculos entre ellos, identificar lugares, establecer períodos de interacción, etc. Es necesario hacer capturas de pantalla de la información contenida en las redes sociales para evitar perder esta información.

- **Pericias psicológicas y otras pericias**

Se ha contado con el apoyo del CAVAS para periciar el estado psicológico basal de las víctimas, sus factores de vulnerabilidad previos y posteriores a la comisión del delito, como también el probable daño psicológico que se ha generado tras la experiencia de trata, cuando se ha estimado pertinente realizar esta pericia. Los elementos anteriores, sumados a la declaración de la víctima, ha permitido acreditar tanto, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba y de la que tomaron ventaja los imputados, como

también la magnitud del mal causado.

Por otra parte, **en el caso de la trata de personas con fines de trabajos forzados** cuando las víctimas pertenecen a pueblos originarios o no forman parte de la cultura occidental, se han realizado pericias antropológicas o sociológicas para explicar el contexto cultural en el que se dieron los hechos en los que se vieron involucradas víctimas e imputados.

- **Investigación patrimonial**

La trata de personas, al igual que otras formas de criminalidad organizada, admite ser descrita como un negocio. En tal sentido, la investigación de este delito implica establecer los flujos y destino de los dineros que ingresan al patrimonio de los imputados.

Sobre las diligencias a considerar, se profundizará en el párrafo relativo al lavado de activos.

- **Participación de querellantes**

Tanto durante la investigación como en el desarrollo del juicio oral, será esencial contar con una participación coordinada de querellantes institucionales y particulares, si los hubiera, tales como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La participación activa de los querellantes ha resultado relevante para obtener sentencias condenatorias de los

imputados e imputadas del delito de trata de personas.

8.2 Técnicas especiales de investigación

El Código Penal contempla las siguientes técnicas especiales para la investigación de este delito:

- Interceptación y grabación de telecomunicaciones. (Art. 411 octies Código Penal).
- Fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes. (Art. 411 octies Código Penal).
- Agente encubierto e informantes. (Art. 411 octies Código Penal).

Las técnicas especiales de investigación podrán utilizarse respecto de una persona, un grupo de personas o una organización delictiva que hubiera cometido o preparado la comisión de la trata de personas y otros ilícitos incorporados por la Ley 20.507.

Además, requieren como requisito previo la autorización por parte del Juez de Garantía competente.

Se consideran buenas prácticas en materia de técnicas especiales en la investigación del delito de Trata de Personas:

● Interceptación telefónica oportuna

Las escuchas telefónicas han servido para lograr identificar a los miembros de una organización criminal, a las posibles víctimas, y al modus operandi.

Han constituido prueba esencial para lograr la condena de los imputados. En consecuencia, debe ser una prioridad de la investigación obtener los números telefónicos de los imputados, para entregar dicha información al Fiscal a cargo de la investigación con el objeto que solicite las autorizaciones judiciales necesarias para su interceptación.

● Agentes encubiertos

Es una técnica especial de investigación que requiere autorización judicial. Su uso debe ser solicitado oportunamente por el o la fiscal al juez o jueza y coordinado por la Fiscalía con las policías.

Esta técnica de investigación busca identificar víctimas, imputados, el lugar donde se produce la explotación y otros aspectos relevantes en la trata de personas.

8.3 Consideraciones especiales para casos de asociaciones delictivas o criminales.

Si bien la trata de personas no siempre se encuentra vinculada a una organización criminal para su comisión, en los últimos años se ha observado un incremento de la participación de organizaciones criminales en la comisión de este delito, particularmente, en la trata de personas con fines de explotación sexual.

Para establecer el delito de asociación delictiva o criminal, es necesario acreditar la pluralidad de sujetos (al menos tres), la permanencia en el tiempo, un objetivo común,

la jerarquía y distribución de funciones.

Varias de las buenas prácticas en la investigación de la trata de personas que se han reseñado en esta guía se aplican también a la investigación de asociaciones delictivas o criminales:

- Investigación patrimonial de imputados y de sus empresas, si las hubiera, incluyendo levantamiento de información tributaria.
- Levantamiento de información bancaria de los imputados para solicitar el alzamiento del secreto bancario.
- Recopilación de información proporcionada por casas de cambio, respecto de las remesas efectuadas por víctimas e imputados, para identificar a los miembros de la organización⁸² y el beneficio económico obtenido por sus miembros mediante la explotación de las víctimas.
- Interceptaciones telefónicas y tráficos de llamadas para establecer los vínculos entre los miembros de la organización, la jerarquía, la distribución de funciones y el modus operandi de la misma.
- Entrada y registro para incautar documentos y evidencia que demuestre cómo operaba la organización.
- Solicitud de movimientos migratorios de los imputados identificados y víctimas para establecer coincidencias de viajes, así como otros partícipes.
- Levantamiento de información desde redes sociales para la identificación de miembros de la organización y sus vínculos.

8.4 Consideraciones especiales para casos de lavado de activos

Como se señala en la literatura especializada, la trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos a nivel mundial junto con el tráfico de drogas y el tráfico de armas. En consecuencia, seguir la ruta del dinero es un elemento muy relevante para lograr desbaratar las organizaciones criminales dedicadas a este negocio.

El delito de lavado de activos sanciona a quien, de cualquier forma, oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de trata de personas o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes o, el que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito.

Varias de las diligencias consignadas a propósito de la asociación ilícita son aplicables también como buenas prácticas para la investigación del lavado de activos tales como:

- Solicitud al o la Fiscal de la causa para que solicite a la Unidad de Análisis Financiero reportes asociados a los blancos investigados.

⁸² 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2012). Sentencia dictada el 13 de diciembre de 2012, causa RIT 287-2012. Considerando decimocuarto.

⁸³ 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. (2012). Sentencia dictada el 7 de septiembre de 2012, causa RIT 199-2012. Considerando undécimo.

- Investigación patrimonial de imputados y de sus empresas, si las hubiera, incluyendo el levantamiento de la información tributaria.
- Levantamiento de información bancaria de los imputados y empresas asociadas, si las hubiera, para evaluar el alzamiento del secreto bancario.
- Recopilación de información proporcionada por casas de cambio, respecto de las remesas efectuadas por víctimas e imputados, para establecer la ruta del dinero.
 - Entrada y registro para incautar documentos y evidencia relacionada con las ganancias generadas por la explotación de las víctimas. En la trata de personas con fines de explotación sexual, es muy relevante identificar los cuadernos, agendas, archivos o planillas en las que se consignaban los servicios prestados por las víctimas y su precio para definir las ganancias obtenidas.
- Levantamiento de información desde redes sociales en las que los imputados ostenten los bienes adquiridos como consecuencia de sus actividades.
- Seguimiento de los imputados para acreditar su rutina diaria y establecer que no desarrollan una actividad remunerada lícita.
- Vigilancia discreta a los domicilios de los imputados para identificar el nivel de vida (tipo de vivienda, vehículos, vestuario, gastos en que incurre) y sus vinculaciones con otras personas.
- Para el caso que haya empresas vinculadas a los imputados, la vigilancia de los lugares en los cuales tienen su domicilio para establecer si existen y si realmente funcionan como tales.

8.5 Delitos conexos de corrupción

En la experiencia internacional, se ha podido conocer que, asociado a fenómenos de criminalidad organizada como la trata de personas, el tráfico de migrantes, o el tráfico ilícito de drogas y especies, aparece la comisión conjunta de delitos de corrupción, como el cohecho, la falsificación de documentos, entre otros, muchas veces asociados a redes de protección de funcionarios públicos a grupos de crimen organizado.

Por consiguiente, es necesario identificar si existiera participación de algún funcionario público en los hechos investigados, y contactar al fiscal especializado anticorrupción que corresponda, así como solicitar apoyo de la Unidad Especializada Anticorrupción, Probidad y Lavado Asociado de la Fiscalía Nacional, para efectos de que se investigue conforme a los criterios de actuación referentes a esos delitos.

Lo anterior, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes, al inicio de la investigación, en relación con las denuncias de las víctimas, cuando exista sospecha de participación de funcionarios públicos en la red de trata de personas, como se refirió en el acápite relativo a las Buenas Prácticas en la Investigación.

Se hace presente que, al existir delitos de corrupción asociados a investigaciones por trata de personas, se puede hacer uso de las redes de cooperación internacional de carácter informal de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en materias de corrupción, a través de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (unac@minpublico.cl).



V.

Herramientas internacionales

Atendido el carácter eminentemente transnacional del delito de trata de personas, sin perjuicio de la existencia y regulación de la trata interna, la cooperación internacional es una condición fundamental para el éxito de cualquier respuesta a este delito.

1. Mecanismos de cooperación jurídica internacional para obtener prueba en el extranjero, recuperación de activos y protección de víctimas:

1.1 Asistencia mutua en materia penal

La asistencia mutua juega un rol primordial en este tipo de investigaciones. Se entiende por tal al mecanismo mediante el cual los Estados procuran y prestan colaboración recíproca para la realización de diligencias y obtención de pruebas, que se utilizarán en una investigación penal. Este mecanismo se efectiviza mediante un requerimiento formal que debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en los Tratados sobre la materia o en la práctica o legislación interna de cada Estado.

Las asistencias más comúnmente solicitadas e incluidas en los Tratados son las siguientes:

- Solicitud de antecedentes penales y corroboración de identidad.
- Toma de declaración a testigos o peritos en el extranjero.
- Peritajes.
- Notificaciones.
- Información patrimonial.
- Videoconferencias.
- Incautación y embargo de bienes.

Dicho listado de asistencias no es excluyente y, en general, los Estados pueden prestarse cualquier otra asistencia que puedan acordar (p.e. retornos asistidos y relocalizaciones a terceros Estados, Equipos Conjuntos de Investigación, Videoconferencias, cualquier otra asistencia no específicamente regulada en el tratado, etc.).

La Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones ("UCIEX") de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público fue designada por el Estado de Chile como Autoridad Central para los tratados sobre asistencia mutua en materia penal, que contemplan dicha figura y, en la práctica, es la encargada de coordinar y gestionar los requerimientos de asistencia penal internacional activos (que se dirigen a otros Estados) y pasivos (que se solicitan por autoridades extranjeras).

Los requerimientos de asistencia mutua internacional en materia penal deberán ser remitidos a las autoridades requeridas extranjeras únicamente por el Ministerio Público a través de UCIEX, en su rol de Autoridad Central del Estado de Chile para tales efectos, o por la Cancillería en su caso, por conducto de la UCIEX.

En caso que las y los fiscales requieran utilizar este mecanismo deberán remitir solicitar el apoyo de la UCIEX, para que inicien el procedimiento correspondiente, mediante un correo electrónico dirigido a uciex@minpublico.cl. En tal caso, los abogados asesores de la UCIEX preparan borrador del requerimiento de asistencia mutua penal con la información y antecedentes que proporcionen las o los fiscales, según

los requisitos que contemplen los Tratados aplicables o la legislación y práctica del Estado requerido. Dicho documento deberá ser revisado y firmado por el o la fiscal respectivo y remitido por vía electrónica a la UCIEEX, salvo que se requiera su remisión en papel (En la práctica, con la crisis sanitaria, la transmisión electrónica de requerimientos de asistencia se ha extendido y constituye actualmente, la regla general).

Las respuestas finales que se reciban se remitirán a la brevedad posible al fiscal de la causa.

1.2 Traslado de fiscales y policías al extranjero

Considerando que los fiscales y funcionarios del Ministerio Público tienen competencia para ordenar y ejecutar diligencias únicamente dentro del territorio nacional, sólo excepcionalmente se autorizará que se trasladen al extranjero para presenciar la ejecución de diligencias o recolección de evidencias solicitadas previamente (por ejemplo, presenciar declaraciones de testigos o imputados; asistir presencialmente para atestiguar la ejecución de diligencias de entrada y registro, etc.), cuando las necesidades de la investigación lo hagan imprescindible y existiendo recursos financieros suficientes.

La autorización para el traslado la dará el Fiscal Nacional, por medio de resolución fundada, y habiendo escuchado previamente la opinión de UCIEEX. En el caso de los policías, la autorización para su traslado será otorgada por el fiscal regional en cuya Fiscalía se sustancie la investigación criminal en la que

incide la solicitud, la cual deberá ser fundada habiendo escuchado previamente a la UCIEEX.

Previo al traslado de fiscales o policías al extranjero, debe enviarse un requerimiento formal de asistencia mutua penal dirigido a las autoridades competentes del Estado extranjero, solicitando la autorización de su presencia, dejando expresa constancia que los funcionarios policiales no realizarán en su territorio diligencia investigativa de ninguna especie.

En ningún caso los funcionarios chilenos podrán realizar diligencias investigativas en el extranjero, cualquiera sea su naturaleza. La presencia de fiscales y funcionarios en la práctica de diligencias en el extranjero estará supeditada a que las autoridades competentes del Estado requerido **autoricen expresamente y por escrito** su traslado y presencia en las labores investigativas.

La presencia en determinadas diligencias puede también concretarse de manera virtual (videoconferencia), de aceptarse tal modalidad por las autoridades requeridas. En estos casos no será necesaria la autorización previa del Fiscal Nacional.

1.3 Equipos conjuntos de investigación (ECI)

El equipo conjunto de investigación entre dos o más estados es un instrumento de cooperación internacional que tiene por objeto llevar a cabo actos de investigación criminal en uno o más de los estados afectados, con un objetivo definido y un período de tiempo limitado,

facilitando la coordinación de investigaciones penales (en Extensión del marco normativo de los Equipos Conjuntos de Investigación, El PACTO-COMJIB, 2022).

Se recomienda el uso de esta herramienta especial de la cooperación jurídica internacional en investigaciones por hechos que trascienden las fronteras chilenas, respecto de los cuales resulte conveniente establecer un mecanismo de cooperación más directo y eficiente con las autoridades del o los Estados involucrados.

Las o los fiscales deberán, a su vez, evaluar en concreto si la respectiva investigación se beneficiaría con la formación un ECI, según la etapa en que esta se encuentre y los antecedentes ya recabados.

La formación de un ECI siempre deberá ir precedida de un requerimiento formal de asistencia internacional tramitado a través de Autoridades Centrales.

El acuerdo de constitución y operativo será redactado en conjunto por los fiscales de los países involucrados a cargo de las investigaciones, con el apoyo y asesoría de UCIEX y sus contrapartes extranjeras

1.4 Comunicación de informaciones espontáneas y denuncias internacionales.

Siempre que surjan antecedentes en las respectivas investigaciones de la eventual comisión de hechos delictivos en el extranjero (sea que estén relacionados directamente o no con el delito investigado), las y los fiscales deberán comunicar prontamente dichos

antecedentes a las autoridades del Estado correspondiente, a través de UCIEX. Con tal fin, deberán remitir un oficio adjuntando los antecedentes que den cuenta de lo anterior, preferentemente por correo electrónico (uciex@minpublico.cl).

1.5 Cooperación interinstitucional internacional

Se entiende por tal la comunicación directa entre autoridades competentes para recabar informaciones o antecedentes que se encuentren en el marco de sus facultades o competencias de las instituciones (Acuerdos interinstitucionales).

Básicamente, se puede solicitar e intercambiar antecedentes que estén en sistemas registrales a los que tengan acceso directo las fiscalías o policías.

1.6 AIAMP

En aquellos casos en que pueda requerirse información directamente a otro Ministerio Público extranjero, la solicitud será formulada por UCIEX, especialmente si tiene como base el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre Ministerios Públicos de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), suscrito en Ciudad de México el año 2018.

Las solicitudes de las Fiscalías Locales o Regionales, en este ámbito, podrán ser dirigidas a la casilla genérica uciex@minpublico.cl

En aquellos casos en que se solicite colaboración a otras Redes de Fiscales Especializados o de otros organismos (por ejemplo, INTERPOL), la solicitud podrá formularse directamente al organismo respectivo con copia a UCIEX (uciex@rninpublico.cl), o por la UCIEX con copia a la Fiscalía requirente.

1.7 REDTRAM

La Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), se formó en el año 2011 en el seno de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Esta Red contempla, en su Protocolo, el intercambio de información, a los fines de que las investigaciones llevadas a cabo por los países intervinientes sean más efectivas. También contiene un apartado específico relativo a las actuaciones de protección y asistencia a las víctimas. Asimismo, contiene obligaciones de decomiso de los bienes producto del delito, a los fines de garantizar la reparación adecuada e integral a las víctimas.

1.8 INTERPOL

La Oficina Central Nacional (OCN) de Santiago tiene acceso a las siguientes herramientas de cooperación internacional para la investigación del delito de trata de personas:

- **Base de datos** de la Organización Internacional de la Policía Criminal (OIPC) – INTERPOL. La OCN puede ingresar y alimentar en línea las siguientes bases de datos:

- Datos nominales de prófugos, desaparecidos y cadáveres: datos filiatorios, fotografías, características.
- Fichas dactilares.
- Perfiles de ADN.
- Documentos de viaje robados/perdidos.

- **Sistema de notificaciones** – La OCN puede solicitar la publicación de las siguientes alertas en el sistema de notificaciones de la INTERPOL, así como efectuar consultas al sistema. Todo ello, previa coordinación con la o el fiscal de la causa y la UCIEX.

- **Notificaciones rojas:** Se utilizan para solicitar la detención de individuos, con miras a su extradición.
- **Notificaciones azules:** Se utilizan para obtener más información sobre la identidad y localización de personas de interés en una investigación.
- **Notificaciones amarillas:** Se utilizan para localizar a personas desaparecidas.
- **Notificación morada:** Se utiliza para alertar y difundir a nivel internacional sobre nuevos modus operandi.

1.9 SISTEMA DE COMUNICACIÓN POLICIAL PROTEGIDA I-24/7.

Consiste en una plataforma de comunicación exclusiva y de alta seguridad por medio del cual se intercambia y solicita información entre las Oficinas Centrales Nacionales de los 190 países miembros.

1.10 MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

Chile dispone de cuatro Memorándum de Entendimiento (MDE) con Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay; y un Acuerdo Binacional con Perú. La suscripción de estas declaraciones bilaterales entre las Partes, establecen los principios que orientan la lucha conjunta contra este delito lo que permite facilitar la implementación de actividades de forma articulada.

En lo que concierne a la investigación criminal, se debe considerar que cada MDE existente establece términos acordados en torno a este ámbito, sin embargo, se puede identificar el desarrollo de acciones orientadas a identificar sobre investigación de la trata de personas entre las policías de ambas Partes, cooperación y asistencia mutua en la elaboración y ejecución de procedimientos y protocolos especiales de investigación de la trata de personas, además del intercambio de normativas jurídicas penales que regulan este delito.

VI. Mitos

Las siguientes son algunas **creencias erradas** respecto del delito de trata de personas, que resulta necesario desmitificar:

- ★ **Es un delito que no ocurre en Chile.**
- ★ **Una persona no es víctima de trata si consintió en el ingreso fronterizo ilegal.**
- ★ **La situación de precariedad económica de las víctimas justificaría las malas condiciones laborales que ofrecen los tratantes, pues estas últimas serían mejor que la situación en que se encontraban en su lugar de origen.**
- ★ **La trata de personas sólo dice relación con prostitución de mujeres extranjeras.**
- ★ **No hay trata de personas si el tratante dio muestras de amabilidad.**
- ★ **Las víctimas de trata rescatadas en un mismo caso tienen las mismas necesidades.**
- ★ **La trata con fines de trabajos forzados es menos traumática que aquella con fines de explotación sexual.**
- ★ **Una víctima siempre estará feliz de ser rescatada.**
- ★ **Una víctima siempre sabrá reconocerse a sí misma como víctima.**
- ★ **No hay delito de trata de personas si el traslado se produce dentro de Chile.**
- ★ **El delito de trata de personas solo afecta a mujeres y niñas.**
- ★ **Solo son víctimas de trata de personas los extranjeros.**

VII. Desafíos

A la fecha del cierre del presente documento, existen materias que deben ser reforzadas para una persecución penal eficaz del delito de trata de personas.

Dentro de ellas, la Subcomisión de Control y Persecución de la MITP ha identificado las siguientes:

1. En atención al aumento de los casos de trata de personas, y con ello, el aumento en la existencia de víctimas de aquel delito; se identifica como un desafío la creación de más casas de acogida de víctimas mujeres y niños, niñas y adolescentes.
2. Ante la ausencia de casas de acogidas especializadas para víctimas del delito de trata de personas hombres y niños, niñas y adolescentes; se considera fundamental la creación de ellas.
3. Asimismo, en atención a que en varias ocasiones, los autores/as del delito en cuestión forman parte de organizaciones criminales violentas o disponen de armamento y que van en búsqueda de las víctimas para lograr su recaptura, se considera crucial que las casas de acogida cuenten con un sistema de seguridad, que pueda proteger la integridad tanto de las víctimas como de los funcionarios públicos que atienden dichas residencias.
4. En relación a las propuestas anteriores, se hace necesario además dotar de más personal capacitado a las casas de acogida, como también aumentar la dotación de las policías, para que pueda cumplir cabalmente con la función de resguardo a dichos lugares.
5. Por otra parte, también se considera necesaria la creación de más puestos de trabajo, con Fiscales y abogados especializados en materia de trata de personas, tanto en la investigación del delito como en el tratamiento de las víctimas.
6. Establecer una coordinación con el Servicio Médico Legal para conocer las capacidades humanas, técnicas y de infraestructura con las que cuentan para tratar el delito de trata de personas.
7. La generación de procedimientos o protocolos que permitan identificar los elementos del delito y las características del fenómeno delictual, trabajando con los actores o instituciones involucrados en el levantamiento o generación de evidencia o documentos que sirvan como elementos de prueba. Para esto, se debe establecer un estándar mínimo a aplicar, en atención a las capacidades humanas, técnicas y de infraestructura de las respectivas instituciones.
8. Para facilitar la persecución del delito en cuestión, se ha identificado como un desafío sensibilizar y capacitar de manera permanente a los distintos actores/as del sistema judicial.
9. Es necesario profundizar la investigación de los delitos conexos a la trata de personas, como la asociación ilícita, el lavado de activos y delitos de corrupción.

Anexo: Números telefónicos de utilidad

Institución	Teléfono
Fiscalía	600 333 0000
Carabineros de Chile	133
Policía de Investigaciones	134
DIRECTEMAR	137
BRITRAP	+569 4072 9659
OS-9 Carabineros	+562 9222 1070
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia	+56 22499 0300
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género	+56 225 496 100
Instituto Nacional de Derechos Humanos	+5622887 8650
Programa de Apoyo a Víctimas - Subsecretaría de Prevención del Delito	600 818 1000



POLÍTICA 
Nacional
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO